

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

Medellín, junio 22 de 2022

Radicado: 05001-31-05-**014-2011-00427- 02**
Demandante: ORLANDO DE JESÚS DUQUE SANTA
Demandado: UNIDAD DE GESTIÓN DE PENSIONES Y PARAFISCALES
UGPP
Asunto: CONSULTA DE SENTENCIA
Tema: RELIQUIDACIÓN PENSIONAL

La Sala Sexta de Decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario de la referencia.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

ANTECEDENTES

A través de la acción judicial la activa pretende la reliquidación de la mesada pensional con inclusión de todos los factores salariales devengados, en particular se tenga en cuenta la totalidad de la bonificación por servicios prestados, y hallando el IBL con la asignación más alta del último año, dando lugar al pago del mayor valor con su indexación.

Para sustentar sus pretensiones expuso que prestó servicios a la Rama Judicial por más de 20 años, siendo beneficiario de los Decretos 717, 911 y 1660 de 1978, en concordancia con el Decreto 546 de 1971, explicando que respecto a la Bonificación

por Servicios prestados que se causa por año cumplido al igual que la bonificación especial debió tomarse en el 100% y no por doceava.

En su respuesta a la acción que fuera presentada por Cajanal en liquidación se estableció que la prestación fue reconocida aplicando las normas que regulan la materia, esto es como beneficiario del régimen de transición pensional que permite la remisión a algunas premisas de la normatividad previa.

En sentencia que desató la primera instancia, la que fue emitida atendiendo a las reglas de la Ley 712 de 2001, tras advertir que el señor Duque Santa causó la pensión de vejez dada la condición de servidor de la Rama Judicial, la forma de calcular la prestación es la contenida en el artículo 6° del Decreto 546 de 1971, esto es al arribar a los 55 años de edad (hombres) con un tiempo de servicio mínimo de 20 años, donde la prestación corresponde a la asignación más elevada del último año de servicio, computando los factores que refiere el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 a saber: gastos de representación, prima de antigüedad, auxilio de transporte, prima de capacitación, prima ascensional, prima semestral y viáticos.

Precisó el fallador de instancia que si bien algunas prestaciones se reciben en un mes determinado, estas se causan o consolidan durante un periodo superior, por tanto para efectos de componer la mesada pensional debe tomarse su porción mensual. Y respecto al monto mensual indicó que este concepto no solo se refiere a la tasa de reemplazo, sino también a la cifra a la cual se aplica.

Bajo estas premisas determinó que la prestación del accionante habría de corresponder a la asignación más elevado en el último año de servicio obteniendo un monto de \$7'292.166 al que aplicó una tasa de reemplazo del 75%, para una mesada inicial de \$5'469.087 desde el 3 de mayo de 2010 y de \$5'642.457 para el año 2011, disponiendo el pago de la diferencia con la respectiva indexación. Por último, gravó en costas a la accionada. (fls. 101/107)

Decisión que fue recurrida por la activa, empero previo a desatar la alzada desistió del recurso (fl. 114) , lo que generó la devolución del expediente al juzgado de origen (fl.115) y tras ser repartido a los Juzgados de descongestión, con providencia del 30 de julio de 2013 fueron liquidadas las costas procesales (fl. 142), se dispuso su archivo (fl. 145) y por solicitud de la parte se dio inicio al trámite ejecutivo.

Sin embargo, con antelación la accionada había solicitado la remisión del expediente para surtir el grado de consulta (fl. 162/165), lo que generó que en providencia del 8 de noviembre de 2019 se declarara la nulidad de lo actuado con posterioridad a la providencia del 11 de junio de 2013 proferida por la Sala dual de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín donde se aceptó el desistimiento al recurso de apelación para surtir el grado de consulta.

CONSIDERACIONES

Previo a resolver los aspectos objeto de apelación encuentra la Sala pertinente expresar que en el presente evento se encuentran por fuera de discusión: **1)** Que mediante resolución 49130 del 21 de septiembre de 2006 la extinta Caja Nacional de Previsión Social, tras advertir que Orlando de Jesús Duque Santa había prestado servicios para la Rama judicial por más de 20 años y contaba con más de 55 años de edad, reconoció la pensión de jubilación, que halló satisfecha en los términos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 con remisión al Decreto 546 de 1971, esto es aplicando el “75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de los 10 años...” para una mesada en cuantía de \$2’799.815 en el año 2006, donde se computaron la asignación básica, la prima especial y la doceava parte de la bonificación por servicios prestados. El disfrute de la misma quedó supeditado al retiro del servicio (cuaderno N° 2 fls. 53/58), **2)** Que la prestación fue reliquidada en resolución N° 4436 de febrero 3 de 2009, donde se promediaron los salarios entre el 7 de junio de 1998 y el 6 de junio de 2008, estableciendo una mesada por valor de \$3’122.260; nuevamente el disfrute quedó sujeto al retiro del servicio (cuaderno N° 2, fls 69/73); **3)** Prestación reliquidada en resolución PAP 10092 de agosto 23 de 2010, esta vez computando lo devengado entre el 1 de julio de 1999 y el 30 de junio de 2009, para una mesada equivalente a

\$3'450.857, obtenida al computar los factores salariales de Asignación Básica, Bonificación servicios prestados y las doceavas de la prima especial y la bonificación especial y su disfrute pendiente a la demostración del retiro del servicio (cuaderno N° 2 fls 89/96) siendo incluido en nómina a partir del 3 de mayo de 2010, momento en que se desvinculó del servicio (cuaderno N° 1 fl. 125)

En este orden de ideas, atendiendo a las materias objeto de debate corresponde a esta corporación determinar si para efectos de calcular la prestación del señor Duque Santa es procedente aplicar el monto establecido en el Decreto 546 de 1971, en particular tomar la asignación más alta del último año de servicio incluyendo el 100% de los conceptos de bonificación por servicios prestados y la bonificación especial.

Pues bien, como punto de partida ha de indicarse que con la entrada en vigencia del sistema general de pensiones se buscó la unificación de los múltiples regímenes pensionales, pero dejando a salvo los derechos adquiridos, esto es las prestaciones que ya se hubieran configurado bajo la égida de las normas anteriores, así como la expectativa de aquellos que se encontraban en un panorama cercano a causar la prestación, para los que se estableció el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Por efectos del régimen de transición para un grupo de ciudadanos que se hallaban en condiciones de cercanía de causar la prestación por tener 35 ó 40 años de edad (mujeres y hombres respectivamente) ó 15 años de servicios a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, se les permitiría consolidar la prestación respetando del régimen anterior sólo tres aspectos a saber: la edad de causación, el tiempo de servicio o densidad de cotización, y el monto.

Respecto al concepto de monto conforme a la jurisprudencia pacífica de la Sala de Casación Laboral de la CSJ ha de entenderse como la tasa de reemplazo o porcentaje de adquisición de la prestación, concepto desligado a la composición del ingreso base liquidación, aspecto que quedó regulado por el sistema general de pensiones, y por tanto no es posible realizar tal cálculo con las reglas de los regímenes anteriores.

Intelección que tiene plena aplicación para las pensiones de los servidores de la Rama Judicial reguladas por el Decreto 546 de 1971, en tanto para aquellos beneficiarios de tal norma por remisión del régimen de transición, se extraen de tal normatividad los conceptos de edad (50 y 55 años de edad para mujeres y hombres respectivamente), tiempo de servicio (20 años) y tasa de remplazo (75%), en tanto el cómputo del ingreso base de liquidación se obtiene con las reglas de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. Criterio que se observa en las decisiones de la Sala de Casación Laboral de la CSJ, al respecto al sentencia SL 3609 de 2019:

“En ese orden de ideas, se tiene que, una vez analizada la argumentación expuesta por el recurrente, el problema jurídico a resolver no es otro que determinar si, el Tribunal se equivocó al establecer que dado que el señor Ospina Franco era beneficiario de la transición, la normatividad aplicable para efectos de calcular el IBL era el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o si, por el contrario, lo era el artículo 6° del Decreto 546 de 1971.

Pues bien, desde ya se advierte que no se evidencia yerro alguno por parte del ad quem y que, en ese sentido, su fundamentación es coherente con el pacífico, uniforme y reiterado devenir de esta Corporación, en donde se ha previsto que todas aquellas prestaciones pensionales que se otorguen en virtud de la transición que consagra el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se harán garantizando los requisitos exigidos en el régimen anterior pero solo en lo que tiene que ver con la edad, el tiempo de servicios o semanas cotizadas y el monto o tasa de reemplazo.

Por lo tanto, en lo que atañe estrictamente al IBL, el mismo habrá de ser calculado de conformidad con el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o, en su defecto, como es el caso, con fundamento en el artículo 21 de la referida disposición normativa.

Así fue abordado recientemente en la sentencia CSJ SL2698-2018, donde resolviendo un caso de similares contornos y reiterando lo desarrollado en providencia CSJ SL2689-2017, dispuso:

Tocante a la controversia planteada entre las partes, la Sala de tiempo atrás tiene definido que, en torno al régimen de transición previsto en la Ley de Seguridad Social, el legislador les respetó a sus beneficiarios solo 3 aspectos: (i) la edad; (ii) el tiempo de servicio o número de semanas cotizadas, y (iii) el monto, que consignara la disposición anterior por aplicarles.

[...]

De suerte que, en lo que atañe al ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con venereo en el régimen de transición, esta Corporación ha sido enfática en que este- IBL- se define a la luz de lo determinado expresamente por la Ley 100 de 1993, y no con lo estipulado en la regulación precedente.

Ahora en cuanto a los **factores computables para establecer el IBL** para los servidores que como beneficiarios del régimen de transición pensional se les aplica el Decreto 546 de 1971, ha de entenderse que corresponde a las sumas que se devengan mensualmente adicionada con los emolumentos que se reciben con una periodicidad superior, pero representados en proporción mensual, esto es aquellas prestaciones recibidas por cada año de servicio, de estas se tomará una doceava, que corresponde a lo que por cada mes de servicio se recibe, al respecto la sentencia SL 288 de 2018 que reitera lo ya expuesto en decisiones SL 1056 de 2016 y 15822 de 2014, esta última que indica:

Se tiene que para el Tribunal, el IBL de tales servidores se encuentra integrado por las doceavas partes de las primas percibidas en el último año de servicios junto con la asignación mensual más alta percibida en ese espacio de tiempo. Por su parte, el recurrente aduce que la liquidación se debió efectuar teniendo en cuenta la asignación del «mes en el último año de servicios», en el que «más alta remuneración le cancelaron», pero sin promediar las doceavas partes de las primas anuales.

Pues bien, el tema planteado por la recurrente ya fue estudiado por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 11 de mayo de 2011 radicado 46502, que rememora la del 4 de mayo de 2010 radicación 35095, en el sentido adoptado por el Tribunal. En ellas que se precisó que el valor de la pensión se encuentra conformado por la asignación básica, más las doceavas partes de las demás retribuciones que se causan por año de servicio o proporcional a éste, al considerar que «cuando se trate de integrar la base salarial para liquidar la pensión, debe tomarse su doceava parte y no su totalidad; y que (...)no ocurre lo mismo con la prima de antigüedad o el subsidio de transporte o el subsidio de alimentación, a manera de ejemplo, pues estos conceptos se causan mes a mes y se cancelan precisamente por ese lapso, de ahí que como monto para conformar la base salarial, se tome el total de lo cancelado por ello en el mes correspondiente».

Con el anterior criterio jurisprudencial queda definido el tema de las doceavas partes como factor de salario, el cual se mantiene invariable, al no existir argumentos nuevos que den lugar a cambiar la postura de la Sala.

Con estas premisas se descende al caso concreto, donde el actor aspira que su prestación sea concedida tomando como referencia: 1) el último año de servicio y 2) seleccionando el mes en que tuvo mayor remuneración, en particular aquel en que recibió algunos conceptos de periodicidad anual.

Los referentes jurisprudenciales muestran con suficiencia que las pretensiones de la activa no tienen vocación de éxito en tanto, para el exfuncionario Duque Santa el beneficio del régimen de transición le permitió causar la prestación con una edad de 55 años de edad, 20 años de servicio y una tasa de reemplazo del 75% aplicable al IBL compuesto con las reglas del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 (en tanto a la entrada en vigencia del sistema pensional se hallaba a más de 10 años de causar la prestación), sin que sea aplicable las premisas del artículo 6° del Decreto 546 de 1971 referente a la asignación más alta del último año de servicio, en tanto tal regla fue derogada por la Ley 100 de 1993.

Como tampoco es posible computar el 100% de los conceptos de Bonificación especial y bonificación por servicios prestados por cuanto las mismas se consolidan por cada año de laborado, con una representación mensual, una doceava; lo opuesto llevaría a entender que cada mes del año se genera el 100% de este emolumento.

En suma, toda vez que las pretensiones de la activa parten de premisas que no se acompañan con la aplicación del régimen pensional, imprósperas son las súplicas, por lo que será revocada la decisión de primera instancia, incluyendo la condena en costas,

en su lugar se declarará la prosperidad de la excepción de inexistencia de la obligación absolviendo a la accionada de todas las súplicas.

Sin costas dentro del grado de consulta.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, REVOCA de forma total la sentencia revisada en consulta.** en su lugar se declara la prosperidad de la excepción de inexistencia de la obligación por la cual se absuelve a la accionada de todas las pretensiones, revocando de igual forma la condena en costas.

Sin costas en el grado de consulta.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,


DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN


MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA


ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001-31-05-**014-2011-00427- 01**
Demandante: ORLANDO DE JESÚS DUQUE SANTA
Demandado: UNIDAD DE GESTIÓN DE PENSIONES Y PARAFISCALES
UGPP
DECISIÓN: REVOCA

Magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 28 de junio de 2022 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

SECRETARIO